

Algunos documentos norteamericanos sobre la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe

En febrero de 1982 el presidente norteamericano Ronald Reagan se presentó ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos para exponer el plan de reactivación económica que, bajo la denominación de Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), el gobierno de los Estados Unidos ofrecía a los pequeños países caribeños y centroamericanos. Desde entonces, hasta su aprobación definitiva por el Congreso de los Estados Unidos, la ICC ha sido objeto de múltiples discusiones. Numerosas personalidades de los países de la región y de los propios Estados Unidos han expresado la absoluta incapacidad de este plan para provocar una mejoría real y sostenida de los problemas económicos de los países de la “Cuenca”. Del análisis efectuado por políticos y especialistas han surgido revelaciones acerca de los objetivos reales que se persiguen con su puesta en práctica y cuyo resultado final se traduce en un fortalecimiento de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos en el área a costa de un incremento del deterioro de la soberanía de los pequeños países de la región: incrementar los beneficios de las transnacionales norteamericanas, centralizar más aún el comercio de la región con los Estados Unidos, preparar la región para una eventual construcción de plataformas de exportación al estilo de las instaladas en el Sudeste asiático, fortalecer el sector, privado de estas economías y en el orden político, disfrazar el apoyo militar a regímenes que, como el de El Salvador, se encuentran sometidos al empuje de las fuerzas populares revolucionarias.

Por su parte, otros representantes directos y exponentes de importantes grupos de poder económico norteamericanos han defendido vehementemente ante el Congreso y otras tribunas la necesidad de implementar la polémica ICC. En este número presentamos al lector tres importantes documentos acerca del particular.

En primer término, el texto del Proyecto de Ley S544 sobre la “Ley de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe” (Caribbean Basin Economic Recovery Act), presentado para su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes, reunidos en el Congreso el 22 de febrero de 1983. Seguidamente la declaración del secretario de Estado George Shultz ante el Comité de Finanzas del Senado acerca del anterior proyecto de ley y, finalmente, la declaración de Mervyn M. Dymally, dirigente del Caucus negro en el Congreso, ante la Reunión Conjunta del Subcomité para la Política Económica y el Comercio Internacional y el Subcomité para Asuntos Interamericanos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara el 23 de marzo de 1982. Por lo interesante de estos textos —y en el caso de las dos intervenciones, por expresar dos opiniones contrarias sobre la ICC—, hemos tenido a bien presentarlo a la consideración de nuestros lectores.

Proyecto de Ley S 544 de la Ley de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe
NONAGÉSIMO OCTAVA SESIÓN DEL CONGRESO

Primera sesión,

orientada hacia la revitalización económica y a facilitar la ampliación de las oportunidades económicas en la región de la Cuenca del Caribe

EN EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS el 22 de febrero de 1983 (fecha de la legislatura, 14 de febrero)

El Sr. Dole presentó el proyecto de ley siguiente (a su nombre, el del Sr. Baker, Sr. Percy, Sr. Danforth, Sr. Heinz, Sr. Symms y Sr. Wallop); el cual se leyó dos veces y fue enviado al Comité de Finanzas.

UN PROYECTO DE LEY

orientado a promover la revitalización económica y a facilitar la ampliación de las oportunidades económicas en la región de la Cuenca del Caribe.

Para su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en la asamblea congresional.

SECCIÓN 1. TÍTULO ABREVIADO

Esta ley puede citarse como “Ley de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe” (Caribbean Basin Economic Recovery Act).

TÍTULO 1. RÉGIMEN DE EXENCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS ADUANALES

Sec. 101. Autoridad que concede el régimen de exención del pago de derechos aduanales

El Presidente puede establecer el régimen de exención del pago de derechos para todos los artículos elegibles para tal efecto, procedentes de cualquier país beneficiario según las disposiciones de este título.

Sec. 102. País beneficiario

(a) (1) De conformidad con los propósitos de este título

A) El término “país beneficiario” significa cualquier país enumerado en la subsección *b* en relación al cual el Presidente ha emitido una declaración designando a tal país como beneficiario en conformidad con los propósitos de este título. Antes que el Presidente designe a algún país como país beneficiario de conformidad con los propósitos de este título, notificará a la Cámara de Representantes y al Senado su intención de hacer tal designación, junto con las consideraciones que respalden dicha decisión.

B) El término “ingresado” significa introducido en territorio de la aduana de los Estados Unidos, o retirado de los almacenes para su consumo.

C) El término “TSUS” significa Tariff Schedules of the United States (19 U.S.C. 1202).

(2) Si el Presidente ha designado a algún país como beneficiario de conformidad con los propósitos de este título, no cancelará dicha designación (ni mediante la emisión de una proclamación con ese propósito, ni mediante la emisión de una declaración que efectúe la cancelación de dicha (designación) a menos que haya notificado a la Cámara de Representantes y al Senado con un mínimo de 60 días de anticipación antes de la cancelación y que haya notificado al país designado su intención de cancelar dicho nombramiento, junto con las consideraciones que respalden dicha decisión.

(b) Al designar países con el status de “países beneficiarios”. el Presidente considerará bajo este título únicamente a los países y a los territorios siguientes o a sus entidades políticas sustitutas: Anguila, Antigua y Barbuda, Las Bahamas. Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana., El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana. Haití, Honduras. Jamaica Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Caimán, Monserrat, Antillas Holandesas, San Cristóbal-Nevis, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas.

Además, el Presidente no designará a ningún país como país beneficiario bajo este título: 1) si dicho país es un país comunista; 2) si dicho país:

(A) ha nacionalizado, confiscado o incautado de otra forma la propiedad o controlado la propiedad perteneciente a un ciudadano, o corporación, sociedad o compañía norteamericanos con un 50% o más de beneficios correspondientes a ciudadanos de los Estados Unidos.

B) ha tomado medidas para rechazar o anular un contrato o acuerdo contraído con un ciudadano o corporación, sociedad o compañía estadounidenses con un 50% o más de beneficios correspondientes a ciudadanos de los Estados Unidos, cuyos efectos son la nacionalización, la expropiación u otro tipo de confiscación o control de la propiedad perteneciente a los Estados Unidos, o

C) ha establecido o implantado impuestos u otras exacciones, condiciones restrictivas de operación y mantenimiento u otras medidas en relación con la propiedad antes mencionada, cuyos efectos son la nacionalización, la expropiación u otro tipo de confiscación o control de dicha propiedad, a menos que el Presidente determine que (I) se le ha dado o se le está dando a dicho ciudadano, corporación, consorcio, o compañía, una compensación rápida, adecuada y efectiva, (ii) se están efectuando negociaciones de buena fe para dar una compensación rápida, adecuada y efectiva de conformidad con las disposiciones aplicables del derecho internacional, o que dicho país esté tomando medidas de otro tipo para liberarse de sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional en relación con dicho ciudadano, corporación, sociedad o compañía, o (iii) una disputa en la que está involucrado dicho ciudadano, corporación, consorcio o compañía en relación con la compensación por dicha confiscación está siendo objeto de un arbitraje de conformidad con las disposiciones de la Convention for the Settlement of Investment Disputes, (Convención para la Solución de los Litigios sobre Inversiones), o en otro

organismo acordado mutuamente, y facilita rápidamente una copia de dicha determinación al Senado y a la Cámara de Representantes;

(3) Si dicho país no actúa de buena fe en el reconocimiento de las obligaciones derivadas de o establecidas por las decisiones de un arbitraje en favor de los ciudadanos o corporaciones, consorcios o compañías estadounidenses, con el 50% o más de los beneficios correspondientes a ciudadanos estadounidenses. que han sido tomadas por árbitros designados para cada caso o por organismos de arbitraje permanentes a los cuales las partes involucradas han presentado su litigio.

(4) Si dicho país asume un régimen preferencial en relación a los productos de un país desarrollado que no sean los Estados Unidos, que tenga o sea factible que tenga un efecto adverso sobre el comercio de los Estados Unidos, a menos que el Presidente haya recibido garantías que considera satisfactorias de que dicho régimen preferencial se eliminaría o que se tomarían medidas para asegurar que no se presentaría dicho efecto adverso de envergadura, y él informa al Congreso sobre dichas garantías.

(5) Si una entidad perteneciente al gobierno en el país dado emprende la difusión por radio o televisión de materiales registrados como propiedad intelectual, incluyendo películas o material para la televisión perteneciente a autores que han registrado su propiedad intelectual en los Estados Unidos, sin su consentimiento expreso; y

(6) a menos que dicho país haya suscrito un tratado, convención o protocolo u otro acuerdo relacionado con la extradición de ciudadanos de los Estados Unidos.

Los párrafos (1), (2) y (3) no impedirán la designación de ningún país como beneficiario de conformidad con esta ley si el Presidente determina que dicha designación obra en interés de la economía o la seguridad nacionales de los Estados Unidos e informe dicha decisión al Congreso con las razones que la fundamentan.

c) Al determinar si designa o no a un país como beneficiario de conformidad con este título, el Presidente tomará en cuenta:

1) la manifestación por parte de dicho país sobre su deseo de que se le designe como tal;

2) las condiciones económicas de dicho país, el nivel de vida de sus habitantes, y cualquier otro factor económico que considere apropiado;

3) el grado en que ese país ha garantizado a los Estados Unidos que facilitará acceso equitativo y razonable a los mercados y los recursos de productos básicos de tal país;

4) el grado en que dicho país cumple las regulaciones comerciales internacionales aceptadas, contenidas en el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), así como los acuerdos comerciales aplicables aprobados en la sección 2 (a) de la Ley sobre Acuerdos Comerciales de 1979;

5) el grado en que dicho país utiliza los subsidios de las exportaciones o establece requisitos para la conducción de las exportaciones o requisitos de contenido local que distorsionan el comercio internacional;

6) el grado en que las políticas comerciales de dicho país, en tanto se relacionan con otros países beneficiarios, contribuya a la revitalización de la región;

7) el grado en que dicho país emprenda medidas de autoasistencia para promover su propio desarrollo económico;

8) el grado en que los trabajadores de dicho país cuentan con condiciones razonables en su puesto de trabajo y disfrutan del derecho a organizarse y negociar los convenios colectivos de trabajo;

9) el grado en que dicho país prohíba a sus ciudadanos participar en la difusión, por radio o televisión de material registrado como propiedad intelectual, incluyendo películas o material para la televisión perteneciente a autores que han registrado su propiedad intelectual en los Estados Unidos, sin el consentimiento expreso de ellos; y

10) el grado en que dicho país está preparado para cooperar con los Estados Unidos en la administración de las disposiciones de este título.

d) La Nota Aclaratoria General 3 (a) del TSUS (relacionada con productos de las posesiones insulares) se enmienda añadiéndole al final el siguiente párrafo: “(iv) sujeto a las disposiciones de la sección 103 de la Ley -de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, a los artículos que se importan de las posesiones insulares de los Estados Unidos se les concederá un régimen para el pago de derechos aduanales no menos favorable que el régimen concedido a dichos artículos cuando se importan de un país beneficiario de conformidad con dicha ley”.

c) Tras cumplir los requisitos de la subsección (a) (2) el Presidente retirará o cancelará la designación de cualquier país como beneficiario si, después de efectuada la designación, determina que como consecuencia de un cambio en las condiciones de tal país, el mismo sería vetado para ser designado país beneficiario bajo la subsección (b).

SEC. 103. ARTÍCULOS ELEGIBLES

(a) (1) A menos que este título excluya cualquier artículo cultivado, producido o fabricado en un país beneficiario de ser elegible de conformidad con este título, se le concederá el régimen de exención del pago de derechos si (A) dicho artículo se importa directamente de un país beneficiario al territorio aduanero de los Estados Unidos; y (8) la suma de (i) el costo o valor de los materiales producidos por uno o dos países beneficiarios o más, sumado a (ii) los costos directos de las operaciones de procesamiento efectuadas en un país o países beneficiarios no están por debajo del 35% del valor evaluado de dicho artículo en el momento de su entrada.

A fin de determinar el por ciento a que se hace referencia en el subpárrafo (B) el término “país beneficiario” incluye a la Mancomunidad de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Si el costo o el valor de los materiales producidos en el territorio aduanero a los Estados Unidos (que no sea la Mancomunidad de Puerto Rico) se incluye en relación a un artículo al cual se aplica este párrafo, una cantidad que no exceda el 15% del valor evaluado del artículo en el momento de su entrada, que se le atribuya a dicho costo o valor en los Estados Unidos, puede aplicarse en la determinación del por ciento a que se hace referencia en el subpárrafo (B).

(2) El Secretario del Tesoro deberá prescribir las regulaciones que sean necesarias para la aplicación de esta subsección incluyendo, pero no limitándose a, regulaciones

que estipulen que, para poder ser elegible para que se le conceda el régimen de exención del pago de derechos de conformidad con este título, un artículo debe corresponder totalmente a la condición de cultivo, producto o manufactura de un país beneficiario o debe ser un artículo comercial nuevo o diferente que haya sido cultivado, fabricado o manufacturado en el país beneficiario; pero ningún artículo o material procedente de un país beneficiario podrá ser elegible para que se le conceda dicho régimen en virtud de haber realizado simplemente (A) simples operaciones de combinación o embalaje, o (B) una simple dilución en agua o una simple dilución con otra sustancia que no altere materialmente las características del artículo.

(3) En la forma en que se usa en esta subsección, la frase “costo directo de operaciones de procesamiento” incluye, pero no se limita a (A) todos los costos de fuerza de trabajo actuales implícitos en el cultivo, la producción, la fabricación o el ensamblaje de la mercancía específica, incluyendo los beneficios colaterales, el adiestramiento durante el proceso del desempeño del trabajo y el costo de la actividad de ingeniería, supervisión, control de la calidad y el personal similar; y (B) los tintes, moldes, herramientas y la depreciación de la maquinaria y los equipos asignables a la mercancía específica.

Dicha frase no incluye los costos que no pueden atribuirse directamente a la mercancía correspondiente o que no son costos de fabricación del producto. como la (i) ganancia, y (ii) los gastos generales de la gestión de los negocios que o bien no son asignables a la mercancía específica o no se relacionan con el cultivo, la producción, la fabricación o el ensamblaje de la mercancía, tales como los salarios administrativos, los seguros contra accidentes y riesgos, la publicidad, los salarios de los vendedores, las comisiones o los gastos.

(b) el régimen de exención del pago de derechos concedido de conformidad con este título no se aplicará a: (1) los artículos textiles y de confecciones de vestir sujetos a los convenios textiles; (2) el calzado, las carteras o bolsos, las maletas de viaje, las mercancías que no pagan intereses, los guantes de trabajo y las confecciones de vestir de piel que no hayan sido designadas en el momento de la fecha de entrada en vigor de este título como artículos elegibles de conformidad con el propósito del Sistema de Preferencias Generalizado, según el título V de la Ley del Comercio de 1974; (3) el atún, preparado o conservado en cualquier forma, en contenedores herméticamente cerrados; o (4) el petróleo, o cualquier producto derivado de éste, lo cual se estipula en la parte 10 de la tarifa 4 del TSUS.

(c) (1) En la forma utilizada en esta subsección (A) El término “productos cárnicos y del azúcar” significa: (i) azúcares, siropes y mieles, según las disposiciones incluidas en los acápites 155.20 y 155.30 del TSUS, y (ii) productos de carne de res o carnero, a pesar de que se contemplan en la subparte B de la parte 2 de la Tabla 1 del TSUS.

(B) El término “Plan” significa un plan estable de producción de alimentos consistente en medidas y propuestas encaminadas a garantizar que el actual nivel de producción alimentaria y el nivel nutricional de la población de un país beneficiario no se verán adversamente afectados por cambios en el uso de la tierra y en la propiedad de ésta, que resulten en caso que se aumente la producción de azúcar y de

los productos cárnicos se emprenda como respuesta a la concesión del régimen de exención del pago de derechos que este título extiende a dichos productos. El Plan debe especificar los aspectos relativos a, y las acciones propuestas por un país beneficiario, como estime conveniente el Presidente, a fin de poder aplicar esta subsección, incluyendo, pero no limitado a (i) los niveles actuales de producción alimentaria y de salud nutricional de la población; (ii) los niveles actuales de producción y exportación de productos azucareros y cárnicos; (iii) los aumentos esperados de la producción y la exportación de productos azucareros y cárnicos resultantes del acceso exento del pago de derechos de productos que entran en el mercado estadounidense, establecido bajo este título; (iv) medidas que se adoptarán para garantizar que el incremento de la producción de dichos productos resultante del acceso de productos exentos del pago de derechos no ocurrirá a costa de la producción de alimentos de primera necesidad; y (v) proposiciones con vistas a un sistema de supervisión sobre la repercusión de dicho acceso exento del pago de derechos para la producción de alimentos de primera necesidad y el uso de la tierra y los patrones de propiedad de la tierra.

(2) El régimen de exención del pago de derechos extendido de conformidad con este título a los productos azucareros y cárnicos que se producen en un país beneficiario será suspendido por el Presidente, según esta subsección, si (A) el país beneficiario no presenta un Plan al Presidente para que sea evaluado en un plazo de 90 días a partir de la fecha de su designación en esa categoría de conformidad con la sección 102; (B) sobre la base de su evaluación, el Presidente determine que el Plan de un país beneficiario no satisface los criterios planteados en el párrafo (1) (B); o (C) como resultado de la supervisión del funcionamiento del Plan de conformidad con el párrafo (5), el Presidente determina que un país beneficiario no está realizando un esfuerzo de buena fe para cumplir su Plan, o que las medidas y proposiciones del Plan, a pesar de estar en proceso de cumplimiento, no logran sus objetivos.

(3) Antes de que el Presidente le suspenda el régimen de exención del pago de derechos sobre la base del párrafo (2) (A), (B), o (C) a los productos azucareros y cárnicos de un país beneficiario debe proponer el inicio de, consultas con el país beneficiario a fin de formular la acción remedial idónea que, dicho país debe emprender para evitar esa suspensión. Si a partir de ese momento el país beneficiario inicia las consultas en un plazo de tiempo razonable y emprende la formulación de la acción remedial de buena fe, el Presidente cancelará la suspensión del régimen de exención del pago de derechos a condición de que ese país lleve a cabo adecuadamente la acción remedial acordada.

(4) El Presidente deberá supervisar el funcionamiento de los Planes puestos en práctica por los países beneficiarios sobre una base bienal y presentará un informe escrito al Congreso para el 15 de marzo, seguidamente al término de cada bienio, que (A) especifique hasta qué punto cada Plan y acción remedial, si la hubiere, acordados de conformidad con el párrafo (4) se han instrumentado; y (B) evalúe los resultados de dicha instrumentación.

(5) El Presidente anulará toda suspensión del régimen de exención del pago de derechos impuesta de conformidad con esta subsección si determina que el país beneficiario ha emprendido la acción apropiada para promediar los factores en los que se basaba la suspensión.

(d) Durante el período, en que esté vigente una disposición emitida por el Presidente en el ejercicio de la autoridad que le confiere la sección 22 de la Ley de Ajuste de la Agricultura (Agricultural Adjustment Act) (7 U.S.C. 624) para proteger un programa de apoyo a los precios del azúcar de remolacha y de caña, la importación y el régimen de exención del pago de derechos de los azúcares, siropes y mieles, clasificados en los acápites 155.20 y 155.30 del TSUS serán regidos de la forma siguiente:

(1) (A) Para todos los países beneficiarios, con excepción de los que están sujetos al subpárrafo (B) y al párrafo (2), se concederá el régimen de exención del pago de derechos de la misma forma que se concede de conformidad con el Título V de la Ley del Comercio de 1974 (19 U.S.C. 2461 et seq.) en el momento en que este título entra en vigor; excepto en el caso en que el Presidente, por recomendación del Secretario de Agricultura, pueda suspender o elevar -con vistas a un ajuste- la limitación del valor establecida en la sección 504 (c) (i) de la Ley del Comercio de 1974 sobre el régimen de exención del pago de derechos concedido a países beneficiarios de conformidad con esta sección, en caso que considere que dicho ajuste no interferirá con el programa de apoyo a los precios para el azúcar de remolacha y de caña y que resulta apropiado a la luz de las condiciones del mercado.

(B) Como una alternativa al subpárrafo (A), el Presidente puede —a solicitud de un país beneficiario no sujeto a lo estipulado por el párrafo (2) y por recomendación del Secretario de Agricultura— optar por permitir que los azúcares, siropes y mieles procedentes de dicho país entren exentos del pago de derechos durante un año civil, estando sujetos a limitaciones cuantitativas que serán establecidas por el Presidente sobre la cantidad de azúcar, sirope y mieles procedentes de dicho país.

(2) En el caso de los países siguientes —cuyas exportaciones de azúcar, sirope y mieles en 1981 no fueron elegibles para la concesión del régimen de exención del pago de derechos debido a la operación de la sección 504 (c) de la Ley del Comercio de 1974— la cantidad de azúcares, sirope y mieles que puedan entrar en los Estados Unidos durante cualquier año civil no se limitará por encima de la cantidad especificada a continuación:

Toneladas-métricas:

República Dominicana	780 000
Guatemala	210 000
Panamá	160 000

Dichos azúcares, siropes y mieles se admitirán exentos del pago de derechos, excepto de conformidad con lo establecido en el párrafo (3).

(3) El Presidente, por recomendación del Secretario de Agricultura. Puede suspender o elevar —con vistas a un ajuste— las limitaciones cuantitativas impuestas de

conformidad con el párrafo (1) (B) (2) si él determina que dicha acción no interferirá con el programa de apoyo a los precios del azúcar de remolacha y el de caña y que resulta apropiado a la luz de las condiciones existentes en el mercado. El Presidente, por recomendación del Secretario de Agricultura, puede suspender el régimen de exención del pago de derechos de toda o parte de la cantidad de azúcares, siropes y mieles cuya entrada está amparada por los párrafos (1) (B) y (2) si dicha acción es necesaria para proteger el programa de apoyo a los precios del azúcar de remolacha y de caña.

(4) Toda limitación cuantitativa impuesta a un país beneficiario de conformidad con el párrafo (1) (B) o (2) se aplicará solamente hasta el punto en que dicha limitación permita que entre una cantidad menor de azúcares, siropes y mieles procedentes de dicho país de la que se permitiría entrar de conformidad con cualquier otra disposición de la ley.

(e) Mediante una declaración el Presidente puede suspender el régimen de exención del pago de derechos establecido por este título de relación a cualquier artículo elegible y puede establecer una tasa para el pago de derechos por dicho artículo si dicha acción se declara de conformidad con la sección 203 de la ley del Comercio de 1974 o la sección 232 de la ley de la Expansión Comercial de 1962. Toda declaración emitida de conformidad con la sección 203 de la ley del Comercio de 1974 que entre en vigor cuando se establezca el régimen de exención del pago de derechos según la sección 101 de este título seguirá vigente hasta que sea modificada o cancelada.

(2) En todo informe de la Comisión de Comercio Internacional al Presidente, según establece la sección 201 (d) (1) de la ley del Comercio de 1974 .respecto a cualquier artículo al que el Presidente haya concedido un régimen de exención del pago de derechos de conformidad con este título, la Comisión declarará si sus investigaciones y recomendaciones se aplican o no a dicho artículo y hasta qué punto lo harán cuando el mismo se importe de los países beneficiarios. Con respecto a todo artículo sujeto a cualquier tipo de ayuda destinada a la importación en vigor en el momento en que se establezca el régimen de exención del pago de derechos de conformidad con la sección 101 de este título. el Presidente puede reducir o suspender la aplicación de dicha ayuda a las importaciones procedentes de los países beneficiarios antes de la fecha programada de conformidad con los criterios y procedimientos contenidos en las subsecciones (h) e (i) de la sección 203 de ,la Ley del Comercio de 1974.

(3) De conformidad con los propósitos de las subsecciones (a) y (e) de la sección 203 de la ley del Comercio de 1974, la suspensión del régimen de exención del pago de derechos establecida por este título se considerará un aumento de la tarifa del derecho estipulado.

(4) Ninguna declaración que establezca únicamente una suspensión referida al párrafo 3 de esta subsección en relación con cualquier artículo podrá hacerse de conformidad con la subsección a y c de la sección 203 de la Ley del Comercio de 1974 a menos que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos además de tomar una determinación afirmativa con respecto a dicho artículo

conforme a la sección 201 (b) de la Ley del Comercio de 1974, determine en el transcurso de su investigación de conformidad con la sección 201 (b) que el grave perjuicio (o amenaza implícita) ocasionada sustancialmente por las importaciones a la industria nacional productora de un artículo semejante o directamente competitivo, sea resultado del régimen de exención del pago de derechos establecido por este título.

(f) (1) Si se presenta una petición a la Comisión de Comercio Internacional según las disposiciones de la sección 201 de la Ley del Comercio de 1974 respecto a un producto corruptible y se alega haber sufrido daños en las importaciones procedentes de los países beneficiarios, entonces la petición también puede presentarse ante el Secretario de Agricultura con la solicitud de que se conceda una ayuda de emergencia de conformidad con el párrafo (3) de esta subsección en relación con dicho artículo.

(2) A los catorce días de la presentación de una petición de conformidad con el párrafo (1) de esta subsección (A) si el Secretario de Agricultura tiene razones para creer que un producto corruptible está siendo importado por los Estados Unidos en cantidades de tal magnitud como para ser causa sustancial de daño grave, o de amenaza implícita, para la industria nacional productora de un producto corruptible semejante o directamente competitivo con el producto importado y esa acción de emergencia se justifica, aconsejará al Presidente recomendándole que emprenda una acción de emergencia; o (B) el Secretario de Agricultura publicará una constancia de su determinación de no recomendar la imposición de una acción de emergencia y así se le comunicará al solicitante.

(3) En el plazo de siete días después que el Presidente reciba la recomendación del Secretario de Agricultura, de emprender una acción de emergencia de conformidad con el párrafo (2) de esta subsección, emitirá una declaración cancelando el régimen de exención del pago de impuestos establecido por este título o publicará una constancia de su determinación de no emprender una acción de emergencia.

(4) La acción de emergencia establecida en el párrafo (3) de esta subsección cesará su aplicación (A) al concederse la ayuda a la importación de conformidad con la sección 202 (a) (1) de la Ley del Comercio de 1974, (8) el día que el Presidente tome una decisión de conformidad con la sección 203 (b) (2) de no conceder ayuda a la importación; (C) en caso de que se presente un informe de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos conteniendo un dato negativo, el día que se presente el informe de la Comisión al Presidente, o (D) siempre que el informe de la Comisión al Presidente, o (D) siempre que el Presidente determine que debido a circunstancias cambiantes dicha ayuda no se justifica.

(5) De conformidad con esta subsección el término “producto corruptible” significa (A) plantas vivas que se contemplan en la subparte A de la parte 6 del programa 1 del TSUS; (B) vegetales frescos o congelados contemplados en los acápites 135.10 y también en el 138.42 del TSUS;

(C) hongos frescos contemplados en el acápite 144.10 del TSUS; (D) fruta fresca contemplada en los acápites 146.10, 146.20, 146.30, 146.S0 incluyendo los acápites

146.62, 146.90, 146.91. 147.03 hasta el 147.33, 147.S0 hasta los acápites 149.21 y 149.S0 del TSUS; y (E) flores recién cortadas contempladas en los acápites 192.17, 192.18 Y 192.21 del TSUS.

(g) Ninguna proclamación emitida de conformidad con este título afectará las cuotas establecidas de conformidad con la sección 22 de la Ley de Ajuste Agrícola (7 U.S.C. 624).

SEC. 104. MEDIDAS PARA PUERTO RICO Y LAS POSESIONES INSULARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

(a) Está vigente que en relación con los artículos que han entrado en el país en la fecha en que entra en vigor esta Ley o después de ella. la Nota Aclaratoria General 3 (a) del TSUS se modifica (1) mediante la enmienda de la cláusula (i)- (A) eliminando “50 por ciento” e insertando en su lugar “70 por ciento”, y (B) Insertando después de “valor total”, “(o más del 50 por ciento de su valor total en relación con los artículos descritos en la sección 103 (b) de la Ley de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe)”; y (2) mediante la enmienda de la cláusula (ii) eliminando “50 por ciento” e insertando en su lugar “70 por ciento”.

(b) El acápite 813.31 del TSUS se enmienda eliminando “4 litros” e Insertando en su lugar “5 litros”, e insertando después de “Estados Unidos, y no más de cuatro litros los cuales habrán sido producidos en otra parte que no sean dichas posesiones insulares”.

(e) Si la suma del monto de los impuestos existentes en las tesorerías de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de conformidad con la sección 7652 (c) del Código de Rentas Públicas Internas de 1954 se reduce por debajo de la cantidad que se hubiera acumulado si el ron importado se hubiera fabricado en Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, entonces el Presidente considerará la adopción de medidas compensatorias y, en este sentido, puede cancelar el régimen de exención del pago de derechos sobre el ron establecido por este título. El Presidente presentará un informe al Congreso sobre las medidas que adopte.

(d) Se revoca la sección 1112 de la ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (19 U.S.C. 2582).

(e) Ninguna acción de conformidad con este título puede afectar ningún derecho arancelario implantado por la legislatura de Puerto Rico de conformidad con la sección 319 de la ley de Aranceles de 1930 (19 U.S.C. 1319) sobre el café importado por Puerto Rico.

(f) De conformidad con el capítulo 1 del título 11 de la ley del Comercio de 1974, el término “industria” incluirá a los fabricantes establecidos en las posesiones insulares de los Estados Unidos.

(g) Toda descarga de mercancías procedente de un punto de origen en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos que ocurra en la fecha de promulgación de esta subsección —si esta descarga se relaciona con la fabricación del ron (según se define en los párrafos (3) de la sección 7652 (c) del Código de Rentas Públicas Internas de 1954)— no estará sujeta a los requerimientos de la sección 301 (a no ser que se trate

de descargas de mercancías tóxicas y contaminadoras), la sección 306 ó la sección 403 de la ley sobre el Control de la Contaminación de las Aguas si (1) dicha descarga ocurre en las aguas territoriales, por lo menos a 1 500 pies del límite costero ordinario. en la parte de la costa en contacto directo con el mar y (2) el gobernador de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos determina que dicha descarga no interferirá con el logro o el mantenimiento de la calidad de las aguas que asegure la protección del suministro público de agua así como la protección y la diseminación de una población balanceada de conchas marinas, peces, fauna y flora silvestres y que permita realizar actividades recreativas dentro del mar y en su superficie sin que ello resulte en la descarga de agentes contaminadores en cantidades que puedan suponerse como causantes de un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente debido a la bioacumulación, la persistencia en el medio ambiente, la toxicidad aguda, la toxicidad crónica (incluyendo la carcinogeneidad, la mutageneidad o la teratogeneidad), o las propensiones sinérgicas.

SEC. 105 INFORMES DE LA COMISIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL SOBRE LA REPERCUSIÓN DE ESTA LEY

(a) la Comisión sobre el Comercio Internacional de los Estados Unidos (que a partir de este momento se menciona en esta sección como la “Comisión”) preparará y presentará al Congreso y al Presidente un Informe sobre la repercusión económica de esta ley en las industrias y los consumidores estadounidenses durante (1) el período de 24 meses que comienza con la fecha de promulgación de esta ley; y (2) cada año civil transcurrido desde esa fecha hasta que se cancele el régimen de exención del pago de derechos establecido por este título de conformidad con la sección 106 (b).

De conformidad con esta sección, las industrias de la Mancomunidad de Puerto Rico y las posesiones insulares de los Estados Unidos se considerarán industrias estadounidenses.

(b) (1) Cada informe requerido por la subsección (a) incluirá, pero no se limitará a, una evaluación de la Comisión sobre (A) el efecto real de esta Ley —durante el período que abarque este informe— sobre la economía de los Estados Unidos en general así como sobre las industrias nacionales productoras de artículos semejantes, o directamente competitivos con artículos importados por los Estados Unidos procedentes de países beneficiarios; y (B) el probable efecto futuro que probablemente tendrá esta Ley sobre la economía estadounidense en general, así como sobre sus industrias nacionales, antes de que se derogue lo dispuesto en esta Ley.

(2) Al preparar las evaluaciones requeridas de conformidad con el párrafo (1) la Comisión deberá, hasta el máximo posible (A) analizar la producción, el comercio y el consumo de los productos estadounidenses afectados por esta Ley, considerando el empleo, el nivel de ganancias y la utilización de instalaciones productivas en relación con las industrias nacionales correspondientes y los demás factores económicos de dichas industrias que considere pertinentes, incluyendo precios, salarios, ventas, inventarios, patrón de la demanda, capital invertido, lo obsoleto de los equipos y la

diversificación de la producción; y (B) describir la naturaleza y alcance de todo cambio importante en el empleo, nivel de ganancias y utilización de las instalaciones productivas y las demás condiciones que estime pertinentes en las industrias nacionales correspondientes y que considere relacionados con esta Ley.

(e) (1) Cada informe estipulado en la subsección (a) se presentará al Congreso y al Presidente antes del término del período de nueve meses que comienza el día siguiente al último del período que abarque el informe.

(2) La Comisión brindará la oportunidad de que el público presente someta, en forma oral o escrita o en ambas, información relacionada con cuestiones incluidas en los informes.

SEC.106. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL TITULO Y CANCELACIÓN DEL REGIMEN DE EXENCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS

(a) Fecha de entrada en vigor. Este título entrará en vigor: en la fecha en que se promulgue esta Ley.

(b) La cancelación del régimen de exención del pago de derechos. Ningún régimen de exención del pago de derechos concedido a países beneficiarios de conformidad con este título quedará en vigor después del 30 de septiembre de 1995.

TÍTULO 2. DISPOSICIONES SOBRE LOS IMPUESTOS

SEC. 201. EL PAGO A PUERTO RICO Y LAS ISLAS VIRGENES e DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS SOBRE EL CONSUMO DEL RON

(a) En general. La Sección 7652 del Código de las Rentas Públicas Internas de 1954 (relacionada con los embarques dirigidos a los Estados Unidos) se enmienda mediante la inserción de la siguiente subsección adicional después de la subsección (b);

“(c) Embarques de ron a los Estados Unidos.”

“(1) Los impuestos sobre el consumo de ron dirigidos a los tesoros de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Todos los impuestos recaudados de conformidad con la sección 5001 (a) (1) por el ron importado a los Estados Unidos (menos la cantidad necesaria estimada para el pago de reembolsos y, descuentos) se dirigirán a las tesorerías de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.”

“(2) El Secretario prescribe la fórmula. De vez en cuando el Secretario prescribirá por medio de regulaciones, una fórmula para la división de dichos impuestos recaudados entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes y la fecha y los métodos para la transferencia de dichas recaudaciones de impuestos.”

“(3) Definición del ron. De conformidad con los objetivos de esta subsección, el término “ron” significa todo producto clasificado según el acápite 169.13 ó 169.14 de las Tarifas Arancelarias de los Estados Unidos (19 U.S.C. 1202).”

“(4) La coordinación con las subsecciones (a) y (b). El párrafo (1) no se aplicará en relación a ningún ron sujeto a los impuestos según la subsección (a) ó (b)”.

(b) Fecha de entrada en vigor. La enmienda efectuada a la subsección (a) se aplicará a los artículos importados que entren a los Estados Unidos después del 30 de junio de 1983.

SEC.202. RÉGIMEN PARA LAS CONVENCIONES CELEBRADAS EN EL CARIBE, ETC.

(a) Disposición General. La Subsección (h) de la sección 274 del Código de las Rentas Públicas Internas de 1954 (relacionada con la asistencia a convenciones, etc.) se enmienda añadiendo al final del mismo e siguiente nuevo párrafo:

“(5) El Régimen para las Convenciones Celebradas en Algunos Países del Caribe.”

“(A) En general. De conformidad con los propósitos de esta subsección, el término región de Norteamérica” incluye a cualquier país beneficiario en relación a toda convención, seminario o reunión similar, sí (en el momento en que comience dicha reunión).”

“(i) está en vigor un acuerdo bilateral o multilateral entre dicho país y los Estados Unidos que establezca el intercambio de información entre los Estados Unidos y ese país, y (ii) si no existe realmente ningún conocimiento por parte del Secretario respecto a que las leyes fiscales de dicho país discriminen las convenciones celebradas en los Estados Unidos.”

“(B) El país beneficiario. De conformidad con los propósitos de este párrafo. el término “país beneficiario” significa lo mismo que estipula la sección 102 (a) (1) (A) de la Ley de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe; excepto que dicho término deberá incluir a Bermuda.”

“(C) La autoridad que concertará los acuerdos sobre el intercambio de información. El Secretario está autorizado a negociar y a concertar un acuerdo para el intercambio de información con cualquier país beneficiario. Un acuerdo sobre el intercambio de información establecerá las bases para el intercambio de dicha información (que no se limita a la información relacionada con los ciudadanos o los residentes de los Estados Unidos o del país beneficiario) como sea necesario o adecuado para aplicar y poner en vigor las leyes fiscales de los Estados Unidos y del país beneficiario (ya se trate de procedimientos criminales o civiles), incluyendo la información que de otra forma estaría sujeta a disposiciones de secreto estatal de las leyes locales del país beneficiario, como son las disposiciones sobre el secreto bancario y las acciones al portador. El acuerdo sobre el intercambio de información podrá cancelarse por cualquiera de los países que lo concerten con un plazo de notificación anticipado razonable y deberá estipular que la información recibida por cualquiera de los países será revelada solamente a personas o autoridades (incluyendo a los tribunales y organismos administrativos) que participan en la administración o la supervisión de los impuestos en los Estados Unidos o en el país beneficiario. o en la decisión sobre las apelaciones relacionadas con dichos impuestos, y que la información la utilizarán personas o autoridades únicamente para los fines mencionados.

“(D) La coordinación con la sección 6103. Todo acuerdo sobre el intercambio de información negociado de conformidad con el subpárrafo (C) se considerará un convenio sobre el impuesto sobre la renta para los propósitos de la sección 6103 (k) (4)”.

“(E) Los datos publicados en el registro federal. Cualquier dato que conozca el Secretario de conformidad con el subpárrafo (A) (ii) y (cualquier cancelación al respecto) se publicará en el Registro Federal.”

(b) Fecha de entrada en vigor. La enmienda efectuada mediante la subsección (a) se aplicará a convenciones, seminarios, o a otras reuniones que comiencen después del 30 de junio de 1983.

Declaración del honorable George S. Shultz sobre la Ley de la Recuperación de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Recovery Act) ante el Comité de Finanzas del Senado

Acojo con beneplácito esta oportunidad de continuar nuestro diálogo sobre la región caribeña, y específicamente sobre la ley de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe. La ley que hemos propuesto es una respuesta de amplias perspectivas a la profundización de la crisis económica y social que perturba a nuestros vecinos más cercanos. Es digna de convertirse en ley el presente año. y mientras más temprano eso suceda, mejor.

NUESTROS INTERESES VITALES

Permítaseme comenzar revisando nuestros propios intereses vitales en la zona. El Caribe constituye una vecindad sin demarcación que compartimos con veintisiete islas y naciones costeras. Su seguridad y bienestar económico repercuten directamente sobre nuestros propios intereses estratégicos y económicos.

No tenemos que trasladarnos a Miami para estar en contacto diario con personas nacidas en la región caribeña ni para apreciar el rápido impacto que tienen en nuestra sociedad las revueltas que allí tengan lugar. En realidad, nuestro país se ha convertido en un puerto seguro para miles y miles de ciudadanos caribeños que cifran sus esperanzas de una vida mejor en una emigración peligrosa, incierta y clandestina. Como resultado de esto, desde el punto de vista numérico la Cuenca del Caribe constituye en estos momentos la segunda fuente de inmigración ilegal de los Estados Unidos.

Esta situación no se superará hasta que las naciones de la Cuenca del Caribe estén en mejores condiciones para ofrecer a sus pueblos las oportunidades para desarrollar en su patria una vida segura y productiva.

Desde el punto de vista económico la región de la Cuenca del Caribe constituye una arteria estratégica y comercial vital para los Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de nuestro comercio, las tres cuartas partes de nuestro petróleo importado y más de la mitad de nuestros minerales estratégicos importados pasan por el Canal de Panamá o el Golfo de México. Si esta región pasara a ser presa de levantamientos

sociales y económicos y estuviera bajo el control de regímenes hostiles, las consecuencias para nuestra seguridad serían inmediatas y de largo alcance.

La salud de las economías caribeñas también afecta nuestra economía. Hoy en día la región constituye un mercado de siete mil millones de dólares para las exportaciones estadounidenses. Miles de empleos se perdieron el año pasado en los Estados Unidos cuando nuestras exportaciones dirigidas a dicha región se redujeron en ciento cincuenta millones, a medida que disminuyeron los ingresos de la región. Una gran proporción de la deuda de los países del Caribe se ha contraído con bancos de este país. A finales de 1981, las inversiones directas de los Estados Unidos en la región ascendían aproximadamente a ocho mil millones.

La Ley de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe constituye la piedra angular de nuestro esfuerzo por hacerle frente a estas cuestiones. Esta ley reconoce las críticas relaciones existentes entre el desarrollo económico y la estabilidad política. Está encaminada a promover el crecimiento económico con vistas a la autosuficiencia, a permitir que los países de la región fortalezcan las instituciones democráticas y a llevar adelante reformas políticas, sociales y económicas. Por último, su objetivo es ayudar a devolver a los pueblos de la región la fe en la capacidad de sus países para ofrecerles la esperanza de un futuro mejor.

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS

Las sociedades de las repúblicas de la Cuenca del Caribe atraviesan un cambio inevitable que las pone bajo una considerable tensión. La declinación del empleo en la agricultura, las altas tasas de natalidad y la lenta creación de empleos en las zonas urbanas, han disminuido las esperanzas de combatir la pobreza y han sido las causas de astronómicas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, se estima que el desempleo de los jóvenes jamaicanos asciende a un 50%. La ausencia de sensacionales aumentos en las inversiones que mejoran el nivel de vida y crean empleos, el incremento del delito y la inestabilidad urbana crearán una espiral descendente de desintegración social. Y debido a que las economías caribeñas son tan pequeñas, las nuevas inversiones, tanto las nacionales como las extranjeras, no se efectuarán sin un acceso garantizado a los mercados del exterior.

La ínfima magnitud de los mercados caribeños individuales —que promedian precisamente millón y medio de habitantes, con dieciséis países que cuentan con menos de medio millón—, los lleva a depender únicamente del mundo exterior de una forma que sólo podemos imaginarnos vagamente.

El ingreso nacional de la mayoría de los países de la Cuenca del Caribe es menor que el de una zona metropolitana de los Estados Unidos que cuente con trescientos mil habitantes, como Omaha, Nebraska o Charlotte, o Carolina del Norte. Por ejemplo, con una población de ochenta mil habitantes, Dominica es el país menos desarrollado del Caribe Oriental. También es uno de los más democráticos y prooccidentales. Si se aspira a que una economía vulnerable como la de Dominica pueda sobrevivir, ésta debe tener acceso a mercados mayores. En Centroamérica, donde las economías tienden a ser algo mayores, los trastornos sufridos en los últimos años por el

Mercado Común Centroamericano han implicado que economías como la de Costa Rica dependan mucho más de mercados no pertenecientes a esta región. Mientras se vean limitadas a producir para sus mercados internos pequeños y pobres, las economías de la Cuenca del Caribe no pueden diversificarse. Tampoco pueden desarrollar los especialistas y la eficiencia necesarios para convertirse en prósperos comerciantes internacionales.

Reconocemos, señor Presidente, que las economías de la Cuenca del Caribe siempre dependerán hasta cierto punto de los mercados que se encuentran fuera de la región. Pero los acontecimientos de los últimos años han tenido un impacto devastador. Los precios de los productos que exportan las repúblicas del Caribe —exceptuando el petróleo, el azúcar, el café, los plátanos, la bauxita—, han bajado drásticamente. Y esto sucede en un momento en que aún luchan por enfrentar los aumentos masivos en los precios de la fundamental de sus importaciones básicas: el petróleo. La recesión que tiene lugar en los Estados Unidos ha causado una caída vertical en los ingresos provenientes del turismo.

La deuda externa ha llegado a niveles cada vez más insostenible. El debilitamiento de las rentas gubernamentales ha paralizado o retardado los planes para el desarrollo. Los ingresos reales per cápita se han reducido a lo largo de la mayor parte de la región.

Todo esto se suma para crear un problema masivo; los gobiernos de las repúblicas caribeñas deben hallar las vías para garantizar la estabilidad sociopolítica y hacer resurgir el crecimiento económico mientras tratan de efectuar también un cambio interno rápido. Su éxito o su fracaso en el enfrentamiento de este reto afectará profundamente el medio en que vivimos.

EL RETO. LAS ALTERNATIVAS

En consecuencia, Los Estados Unidos consideran que es de interés vital la ayuda a sus vecinos del Caribe para que logren su meta de contar con sociedades abiertas y economías en desarrollo mediante el intercambio productivo con nosotros y con el resto del mundo. La Administración ha abordado esta tarea con pleno reconocimiento de que contamos con grandes haberes y ventajas cuando se trata de apoyar un desarrollo democrático.

Esto adquiere mayor claridad cuando consideramos las alternativas.

Una de las alternativas es la solución cerrada: la sociedad que a pesar de no constituir una economía viable, cuenta consigo misma y exige por decreto la distribución de los beneficios económicos limitados que una pequeña economía puede producir por sí misma o puede recibir como ayuda.

Esta es la receta para el establecimiento de la fuerza totalitaria —porque el pueblo no la aceptaría voluntariamente—, y el estancamiento económico. Es la solución cubana. Ello plantea continuas amenazas a nuestros intereses en este hemisferio y hemos tenido que enfrentarlas en los últimos veinte años.

Una segunda alternativa es la reducción de la población hasta el nivel que una economía pequeña puede mantener por sí misma. Con la densa población joven y las

altas tasas de natalidad de estos países, esta alternativa implica la emigración masiva de la región de la Cuenca del Caribe. Nuestro país es, inevitablemente, el punto de destino preferido.

Por mucho que demos la bienvenida a la rica contribución que los inmigrantes de la región aportan a nuestra vida, la inmigración masiva no es lo deseable. Eso no es lo que se debate. Ni tampoco es la única razón que nos preocupa.

La legislación propuesta por el Presidente apoya una tercera alternativa de carácter democrático. Esta es la única alternativa que se ajusta a nuestros propios intereses vitales y a la larga tradición de nuestra nación como fuente de progreso y de esperanza del mundo. Desde el punto de vista político, los pueblos de estas sociedades han manifestado que, desean poder decidir su propio destino y que rechazan las fórmulas totalitarias. Las dos terceras partes de los gobiernos de la región cuentan con gobiernos electos democráticamente. En las demás también tiene lugar un progreso significativo hacia la democracia, a pesar de los obstáculos.

La democracia representa una serie de valores que virtualmente todos los pueblos de la región consideran solidarios con sus propias aspiraciones. El patrón de Cuba —y ahora el de Nicaragua—, constituyen claras manifestaciones de represión política y de fracaso económico.

Desde el punto de vista económico contamos con el haber que puede ser finalmente decisivo en la orientación del desarrollo del Caribe. Representamos una exitosa economía de mercado, un mercado natural para las exportaciones caribeñas, la fuente principal de inversiones privadas en la región, más la administración y la tecnología que le son concomitantes.

La iniciativa caribeña de la Administración es un enfoque imaginativo y comprensivo para que estos haberes se orienten hacia los problemas de nuestros vecinos caribeños. Se trata de un esfuerzo de visión futura para darle un impulso tanto al desarrollo como a la estabilidad. Porque se basa en los recursos y la empresa privada, cuenta con el potencial para enfrentar de manera fundamental su propia situación económica, profundamente precaria. Debido a que puede ayudar a aliviar las delicadas transiciones sociales y políticas antes de que éstas lleguen a crear problemas de seguridad de dimensión internacional, constituye un programa para adelantarnos a la historia, en lugar de enfrentarnos simplemente a sus efectos indeseables.

EL PROGRAMA DE LA CUENCA DEL CARIBE

Nuestro programa forma parte de un importante esfuerzo multilateral. Otros países de la región que cuentan con ingresos más altos también están incrementando significativamente sus esfuerzos.

Canadá ha emprendido un programa quinquenal para la región que aporta más de quinientos millones de dólares. Actualmente Canadá ofrece un régimen libre de derechos o de acceso preferencial al 98% de sus importaciones procedentes de la Cuenca del Caribe. A pesar de sus propios problemas financieros México y Venezuela mantienen sus créditos concesionales a la región mediante sus suministros

de petróleo. El apoyo financiero de Venezuela ha sido superior a los dos mil millones y medio de dólares durante los últimos cinco años. Colombia está acometiendo una asistencia técnica superior a los cincuenta millones de dólares, nuevas líneas de crédito que ascienden a los diez millones de dólares por país y el financiamiento adicional de la balanza de pagos, más un fondo fiduciario para los países menos desarrollados del Caribe Oriental.

Los esfuerzos colectivos de estas democracias constituyen un fuerte estímulo para las sociedades abiertas y para el desarrollo democrático de la región. Pero sin nosotros el éxito correría peligro. Nuestra plena participación es una necesidad vital.

La contribución de los Estados Unidos comprende tres tipos de medidas económicas de mutuo reforzamiento: oportunidades comerciales, incentivos fiscales y ayuda. El programa se ha desarrollado mediante constantes consultas con los gobiernos y los sectores privados de las regiones. Refleja sus propias necesidades y la evaluación de sus necesidades.

Como ustedes saben, el verano pasado pudimos comenzar nuestras iniciativas económicas caribeñas, cuando el Congreso aprobó una fórmula de ayuda complementaria de emergencia de trescientos cincuenta millones,—elemento clave en el programa original de la Cuenca del Caribe propuesto por el Presidente. Nuestras solicitudes de ayuda, tanto para el año fiscal de 1983 como para el año fiscal de 1984, reflejan la nueva y más alta prioridad que hemos concedido a la zona de la Cuenca del Caribe, al asignar nuestros recursos de ayuda económica. Como porcentaje de nuestro presupuesto de ayuda económica general, la ayuda a la región del Caribe se duplicará en el año fiscal 1983 y 1984, sobre la del año fiscal 1980, de un 6,6% que fuera autorizado en 1980, hasta un 13,6% propuesto para el año fiscal 1984.

La mayor parte de los trescientos cincuenta millones asignados el año pasado debía ser utilizada obligatoriamente por el sector privado de los países que tenían los problemas financieros más serios. Esto ha ayudado a muchas firmas privadas productivas que ya estaban establecidas a continuar obteniendo las materias primas necesarias y los equipos procedentes de los Estados Unidos. Además, ha proporcionado un apoyo crítico a los problemas de la balanza de pagos y a los proyectos de la infraestructura de los pequeños países menos desarrollados.

También hemos podido utilizar una parte de estos fondos para apoyar oportunidades de adiestramiento y de becas para individuos de la región caribeña con aptitudes para dirigir.

Estas oportunidades se basan en nuestro objetivo de transferir conocimientos y habilidades, incrementar la cooperación económica entre las naciones de la región y fortalecer los vínculos políticos entre los países receptores y los Estados Unidos. Actualmente estamos ofreciendo mil trescientas becas cada año. Y a medida que dispongamos de nuevos fondos, el número de individuos que las obtengan continuará aumentando. Estos programas tienen una gran repercusión económica y política en relación con el desarrollo y constituyen un elemento clave en nuestra ayuda a la región de la Cuenca del Caribe.

Pero como dijo el Presidente cuando solicitó la asignación de fondos de emergencia para la ICC, la ayuda financiera sólo es un remedio a corto plazo. Ciertamente, la ayuda financiera y los planes de desarrollo serán baldíos si este proceso de desarrollo no es un proceso integrado, con una base amplia. Creemos que dicho desarrollo sólo puede lograrse mediante una estrategia que estimule la iniciativa y la inversión privadas.

EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

La clave de la nueva producción y el empleo en el Caribe es el acceso garantizado a su mercado natural en este país. Los suministradores del Caribe necesitan que se les ayude a entrar en competencia con otros productores establecidos, de experiencia. Eso sugiere una solución audaz que refuerce el polo de atracción natural que es el mercado de los Estados Unidos.

La proposición del Presidente en el sentido de conocer la entrada exenta del pago de derechos a los productos de la Cuenca del Caribe durante un período de doce años constituye el punto central de la ICC. Esto puede proporcionar un impulso decisivo al desarrollo del Caribe. La proposición es sensacional y sencilla. Ofrece los beneficios económicos a largo plazo del libre comercio y el impacto inmediato de un compromiso político importante con la región. La garantía del acceso exento del pago de derechos al vasto mercado de los Estados Unidos es una medida que proporcionará incentivos sólidos y continuados para las inversiones, más la innovación y posibilidad de correr riesgos en los países del Caribe.

Como he señalado, señor Presidente, las economías internas de la mayor parte de las economías de la Cuenca del Caribe son simplemente demasiado pequeñas para permitir la diversificación esencial y para lograr el crecimiento no inflacionario. La apertura del mercado de los Estados Unidos a los productos no tradicionales de estos países brindará importantes oportunidades para desarrollar nuevas producciones y un incentivo para producir con mayor eficiencia. La producción aumentada y diversificada se revertirá en salarios más altos, en una clase media fortalecida, más los recursos disponibles para la educación y la salud y una mayor demanda de materias primas, equipos y productos terminados procedentes de los Estados Unidos. Reconozco, señor Presidente, que ésta es una época de dificultades económicas en nuestro país. Resulta comprensible que exista preocupación por la repercusión que esta legislación tendrá sobre los trabajadores de los Estados Unidos.

Estoy convencido de que la repercusión que tendrá sobre nuestra economía será positiva, porque los países caribeños están muy estrechamente vinculados a nuestra economía. Las ventas que les hacemos se incrementarán al mismo ritmo de sus economías. Exceptuando el comercio del petróleo, tenemos un superávit comercial de dos mil millones de dólares con la Cuenca del Caribe, y somos el aliado comercial más importante de la mayoría de los países de esa zona. Una Cuenca del Caribe más fuerte será un cliente mejor y más confiable de los productos estadounidenses. A medida que los países de la región produzcan más, importarán más. Los trabajadores norteamericanos compartirán los beneficios de este crecimiento.

Las economías de la Cuenca del Caribe sólo equivalen al 2% de nuestro PNB, y nuestras importaciones procedentes de esa región representan menos del 4% del total de nuestras importaciones. Las importaciones que no están exentas del pago de derechos representan un por ciento aún más bajo. Por tanto, incluso un insignificante incremento de la producción y las exportaciones de la Cuenca del Caribe no tendría una seria repercusión negativa sobre nuestra economía. Y si las industrias estadounidenses se ven perjudicadas por las importaciones caribeñas pueden recurrir a la ayuda remedial estipulada en las disposiciones de la Ley sobre el Comercio de 1974.

Entre los mercados más importantes, el de este país es el más abierto del mundo. Una gran parte de las exportaciones de la Cuenca del Caribe destinadas a los Estados Unidos ya entran en esta nación sin pagar derechos. El petróleo representa casi el 60% de nuestras importaciones procedentes de la región. En 1982 el 70% de nuestras importaciones no petroleras procedentes de la Cuenca del Caribe entraban al país sin pagar derechos.

El 16% de estas importaciones no petroleras entraron amparadas por el SGP. Pero el SGP expirará al año próximo. Mientras que la Administración apoya enérgicamente el aplazamiento del SGP, éste contiene restricciones de necesidades debido a la competencia y exclusiones de productos que limitan su utilidad como estímulo para la recuperación de los pequeños países de la Cuenca del Caribe. Los productos a los que se concedería la entrada al país exento de pago de impuestos como resultado de la legislación propuesta para la ICC sólo comprenderían la cuarta parte del 1 % del total de importaciones estadounidenses en 1982. Sin embargo, estos productos representan una esfera importante de posibles nuevas producciones para los países de la Cuenca del Caribe.

Señor Presidente: quisiera mencionar brevemente una parte de este proyecto de ley que no estaba incluida cuando el pasado mes de agosto hablé sobre esta ley ante este Comité. Me refiero a la disposición sobre la deducción de los impuestos. Esta disposición reconoce la vital importancia del turismo y los viajes para las economías de muchas naciones caribeñas. Debo hacer énfasis en que esta disposición simplemente concedería a los convenios con la Cuenca del Caribe un status fiscal igual al que disfrutaban actualmente México, Canadá y Jamaica. En nuestras consultas con los líderes de los negocios y gobiernos de la Cuenca del Caribe, frecuentemente se nos menciona el desventajoso régimen fiscal actual de los convenios con el Caribe, que se considera un obstáculo para la recuperación de sus industrias de viajes. También debemos tener en cuenta que muchos dólares norteamericanos gastados en viajes en el Caribe regresan por la vía de las líneas aéreas, los hoteles y las instalaciones recreativas, que son de propiedad norteamericana.

Permítame reiterar, señor Presidente, el importante papel que desempeñan Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en la ICC.

Desde los primeros días de esta Administración hemos efectuado estrechas consultas con los gobiernos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos para bosquejar la iniciativa de forma que estimulara el desarrollo del Caribe

estadounidense. La legislación refleja eso en varias formas. Permite la entrada a los Estados Unidos de importaciones insulares. Permite explícitamente a las industrias puertorriqueñas y de los territorios estadounidenses acogerse a la petición de ayuda estipulada por las disposiciones de protección de la ley sobre el comercio de los Estados Unidos. Modifica también las restricciones relacionadas con el medio ambiente impuestas a la industria ronera de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y crea los términos de las regulaciones sobre el origen para estimular la utilización de productos precedentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Una disposición importante sería la transferencia del impuesto sobre el consumo de todo el ron importado a la tesorería de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En resumen, las facilidades, las habilidades y al pueblo de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, constituyen un factor importante de nuestros esfuerzos en favor del desarrollo en todos los rincones del Caribe.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA

La dimensión política del progreso del Caribe tiene una importancia primordial y fundamental para nosotros. No andamos en busca de clientes, señor Presidente.

Nuestro objetivo es una región de países independientes en que los pueblos puedan escoger sus líderes y su propio camino hacia el progreso económico y social. Confiamos que surgirán sociedades y regímenes que no nos sean hostiles. Sobre esa misma convicción se basa el sólido compromiso de las demás democracias de la región con la ICC. Junto al gobierno de Venezuela, México, Colombia y de las otras democracias de la región aspiramos a estimular las reformas económicas y sociales que aborden los verdaderos problemas de los distintos sectores de la población de los países de Centroamérica y del Caribe.

La estabilidad de las sociedades basadas en la libertad de reunión y no en la coacción debe depender de la forma en que se aborde el derecho de los pueblos a ser dueños de su propio país. Ellos deben ser capaces de organizarse en entidades y en sindicatos para promover sus intereses económicos. Y deben ser capaces de ejercer sus derechos políticos, libres de toda intimidación. Esa es la orientación que estimulamos mediante nuestro apoyo a la región de la Cuenca del Caribe. También es el curso que aspiran a tomar los pueblos de la región, según han demostrado repetidamente durante su propia vida política.

CONCLUSIÓN

La ICC se basa firmemente en la tradición y los valores, tanto de este país como de los de la región del Caribe.

Se trata de un esfuerzo sólido y multilateral en que el gobierno de los Estados Unidos ha cooperado y consultado con los gobiernos de Canadá, Venezuela, México y Colombia, con otros países donantes y con las instituciones financieras internacionales. Las proposiciones hechas ante este Comité son el resultado de largos debates con líderes de los negocios y de gobiernos de la región de la Cuenca del Caribe sobre los obstáculos a su resurgimiento económico. El centro de nuestros

esfuerzos está en el sector privado, que debe ser el motor del crecimiento económico perdurable.

Las naciones de la Cuenca del Caribe cuentan con nosotros. Ya hace más de un año que el Presidente Reagan bosquejó sus proposiciones sobre la ICC ante la OEA. Dichas proposiciones tuvieron una cálida acogida, incluso fueron recibidas con entusiasmo por la mayor parte de los líderes gubernamentales, obreros y del sector privado de dicha región. Para las personas de los países de la Cuenca del Caribe que creen en la cooperación con los Estados Unidos, en la democracia pluralista y en la empresa privada, el anuncio sobre la iniciativa demostró que los Estados Unidos están impuestos de la importancia de efectuar una acción urgente y de largo alcance en favor de la promoción de la prosperidad de la región. Se sintieron amargamente frustrados de que esta legislación no llegara al Senado durante el último Congreso. Si no actuamos ahora, nuestra inactividad se interpretará como una falta de interés y una promesa incumplida.

Sería una traición a los líderes moderados de la región que han orientado su política hacia la cooperación con los Estados Unidos y hacia la realización de serios esfuerzos en favor del desarrollo económico y la democracia. Extinguiría las esperanzas de la región en la disposición de los Estados Unidos para brindar una ayuda significativa que estimule el progreso social y económico de la Cuenca del Caribe.

Confío, señor Presidente, en que tras una revisión cuidadosa este Comité y el Senado reconocerán que esta legislación es importante para los intereses de los Estados Unidos y el de los países de la Cuenca del Caribe. Insto encarecidamente a que se emprenda una acción favorable.

Declaración de Mervyn M. Dimally ante la Reunión Conjunta del Subcomité para la Política Económica y el Comercio Internacional y el Subcomité para Asuntos Interamericanos del Comité para Asuntos Interamericanos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara

Señor Presidente:

Me siento complacido de que se me brinde la oportunidad de hablar ante la reunión conjunta del Subcomité para la Política Económica y el Comercio Internacional y el de Asuntos Interamericanos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara a nombre de la Congressional Black Caucus Task Force on the Caribbean, en respuesta a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) del presidente Reagan y su legislación concomitante.

Nosotros, miembros del Caucus, hemos encontrado tres puntos sobresalientes importantes en la ICC y la política expresada en ella, y consideramos que deben ser objeto de un análisis crítico. El primero es la forma en que esta Administración define sostenidamente la región del Caribe. El segundo es la calidad y la cantidad de la ayuda económica ofrecida por la ICC a los Estados insulares, y el tercero son las nefastas acciones militares o paramilitares que han rodeado el anuncio de la ICC por parte de la Administración.

Hace unos cuantos meses, la Congressional Black Caucus Task Force on the Caribbean advirtió no sólo a nuestros colegas de la Cámara, sino también a los de la Administración, que esta Administración comete un error conceptual fundamental en su empeño por considerar la región del Caribe —incluyendo a las naciones de México, América Central y el extremo norte de América del Sur—, como la Cuenca del Caribe. Sin duda, el error se origina en las percepciones que predominan en esta Administración, en la cual toda una serie de experiencias históricas y culturales de los pueblos se aglutinan y clasifican en una misma categoría. Lamentablemente, esta percepción se deriva de una serie de suposiciones basadas en una serie de criterios estrechos que agrupan a los pueblos de todas las razas —la roja, la amarilla, la mestiza y la negra— en una misma categoría.

Sin embargo, aún más serias son las implicaciones militares de esa definición miope. Al agrupar los Estados insulares junto a los países de América Central y denominarlos Cuenca del Caribe hemos convertido rápidamente a toda la región en una zona militar involucrada en la lucha y la tensión de América Central.

Nuevamente instamos a que esta Administración defina el Caribe como la región que abarca todas las islas rodeadas por el Mar Caribe, además de Belice; Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, en lugar de la definición más extensa que utiliza la Administración actualmente.

La fórmula económica de la ICC debe haber recordado a los pueblos de América Central y del Sur la política de Teddy Roosevelt de “las zanahorias y el garrote”. En el caso de la administración Reagan, tal parece que esta se convierte en una política que ofrece “pequeñas zanahorias y es portadora de un gran garrote”.

El paquete de ayuda —como se hace cada vez más obvio— no es más que una fórmula militar en la que el grueso de dicha ayuda, que es escasa, va dirigida a las repúblicas de América Central. Pero con vistas a un análisis más detallado, incluso en caso de que eliminemos totalmente los aspectos militares de esta política económica, la ICC deja mucho que desear.

El impulso de la política de ayuda contribuirá excepcionalmente poco a crear la infraestructura que hace falta establecer. Para la vasta mayoría de estos países, la magia del mercado no es una panacea, porque se trata de economías que son excepcionalmente limitadas y débiles. Sus mercados internos —en especial el de bienes que podrían producir para su propio consumo—, con frecuencia no son lo suficientemente amplios para mantener el mercado. La mayoría de las economías insulares son economías basadas en el monocultivo o en una industria única, totalmente dependiente de la importación de productos tales como alimentos para su subsistencia. Por tanto, no es práctico hablar de soluciones de mercado en el caso de las pequeñas economías insulares.

Hace varios meses la Congressional Black Caucus Task Force on the Caribbean señaló la necesidad de que la Administración ayudara a estas limitadas y débiles economías insulares a desarrollar sus infraestructuras con un sistema mejor de transportación, escuelas, atención médica y transporte entre las islas. Sencillamente, no hay modo de que las pequeñas sumas de dinero asignadas por la ICC a las islas

caribeñas puedan servir de ayuda suficiente para lograr este fin y ayuden a estos países a alcanzar la autosuficiencia. Analicemos estas cifras con más detalles.

En primer lugar, más de dos tercios del total de trescientos cincuenta millones asignados se destinan a El Salvador. El resto es casi lo suficiente para garantizar, por su parquedad, el fracaso de esta ayuda en los países del Caribe Oriental. Por ejemplo, a Haití —que tiene enormes problemas económicos— se le asignan cinco millones de dólares. En el Caribe Oriental se distribuyeron diez millones entre sus cinco países, en comparación con el pequeño país de El Salvador, que recibe ciento veintiocho millones.

Parte de las “pequeñas zanahorias” que se le ofrecen a los países del Caribe es la eliminación de los aranceles. Hay que darse cuenta de que casi un 90% de los productos caribeños ya entran en los Estados Unidos sin pagar aranceles. Los dos renglones a los que nos referimos verdaderamente son el azúcar y el ron. Cuando hace un mes el presidente Reagan habló ante la Organización de Estados Americanos, el azúcar se incluía implícitamente en la iniciativa. No obstante, en la legislación enviada al Congreso el azúcar figura nuevamente en la lista de los productos exentos y estará sujeta al mismo tipo de regulación administrativa que la regía anteriormente.

La legislación de la ICC permite que un litro de ron adicional procedente de países que no sean Puerto Rico y las posesiones insulares de los Estados Unidos entre en este país libre de impuestos. En estos momentos, el consumo del ron procedente de los países del Commonwealth que entra en los Estados Unidos es aproximadamente un 3%. Si no hubiera restricciones, se estima que el consumo aumentaría aproximadamente hasta un 6%. Un incremento de un litro sólo tendría un efecto positivo limitado sobre esos países.

La ICC deja abierta la posibilidad de que se efectúen negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y los países individualmente para concertar convenios sobre el comercio y las tarifas arancelarias. Esto nos conduce a uno de los aspectos más serios de la proposición económica de la ICC —el de contraponer entre sí a los países caribeños, el establecimiento de la competencia en lugar de la cooperación en la región.

No podemos hacer demasiado énfasis en la naturaleza destructiva que puede tener esta división en la zona, y el inmenso perjuicio que de ella puede resultar para las economías débiles que integran el Caribe, especialmente el Caribe Oriental, al contraponer entre sí a los países en relación con una ayuda comercial o económica favorable.

El pueblo y los gobiernos del Caribe están bien concientes de los peligros de dicha competencia. Durante el mes pasado, desde que el Presidente pronunciara su discurso, hemos sido testigos de una oposición cada vez mayor a los principios fundamentales de la ICC. La oposición al plan procede de distintos sectores. No sólo de los que era de esperar que se opusieran a él, sino también de países moderados y amigos de los Estados Unidos.

Por ejemplo, los países moderados temen expresar su oposición demasiado ruidosamente; primero porque temen pasar a ser objetos de algún tipo de represalia económica, o quedar al margen de una serie de negociaciones bilaterales en las que los Estados Unidos favorecen más a un país que a otro. Incluso en Jamaica —país al que se le asignan cincuenta millones de dólares desde la ICC— periódicos respetados que están a favor de los Estados Unidos cuestionan la ICC planteando que resulta demasiado limitada para el Caribe, y expresan que la ayuda que se brinda de esa forma agudiza el detestable problema del regionalismo en la zona.

Además, los países caribeños cuestionan la validez del paquete de ayuda porque existe una desconfianza fundamental hacia los Estados Unidos, surgida tanto de nuestra historia en la región como del compromiso de esta Administración con su propio pueblo. Una Administración que no ha mostrado compasión hacia sus propios pobres, minorías y desposeídos no puede engañar a los pueblos del Caribe con la intención de ayudar a los pobres y los desposeídos de la región. Varios individuos informan ahora que la ICC sólo es un esfuerzo para revivir la economía estancada de los Estados Unidos.

Estamos bien concientes de que la supply-side economy conduce rápidamente la maquinaria económica de este país a una paralización. Ahora nos encontramos con que nuestras corporaciones y compañías deben hallar nuevas vías de inversión, sin las regulaciones gravosas que protegen la salud y la seguridad de los trabajadores estadounidenses y el medio ambiente de este país. Además, algunos consideran que la ICC es parte integrante de una política comercial de los Estados Unidos que puede ayudar a este país, que cuenta con déficit comerciales cada vez mayores.

De acuerdo con esta proposición, la ampliación del comercio entre los Estados Unidos y el Caribe tendrá algunos efectos colaterales, pero fundamentalmente sus beneficios enriquecerán nuestras corporaciones, tales como la industria de la construcción de barcos, algunos bancos y unas cuantas compañías que se dirigirán al Caribe durante los próximos doce años. y que obtendrán una gran ganancia.

El peligro más serio de esta política económica en la región es la vinculación de la ayuda económica a una postura histórica, anticubana y anticomunista. Granada, un país insular donde predominan los negros, que mantiene lazos de amistad con Cuba, fue objeto de un señalamiento por parte del Presidente en su discurso ante la Organización de Estados Americanos. El Embajador de Granada ha sido tratado con aspereza continuamente por parte de esta Administración, y el país fue marginado señaladamente de toda ayuda económica en la ICC. Desde luego, el mensaje es claro para el resto de los países de la región: haz lo que queremos y compórtate como queremos, o atente a las consecuencias.

Esta exhortación al estilo del “gran garrote” se reviste entonces con la suficiente demagogia; es decir, insta al pueblo norteamericano a facilitar una ayuda para detener a los comunistas del hemisferio. Y echándolos en un mismo saco, considera que todos los que luchan contra la represión y exigen justicia económica, todos los que desean trabajar conjuntamente en cooperación, no son más que títeres de los soviéticos o de los cubanos. Esta política es la del paternalismo en su peor

manifestación, con lo cual advertimos a nuestros hermanos menores mestizos y negros contra el peligro de los diablos rojos.

No en balde existe una considerable desconfianza, incluso hacia el paquete de ayuda que esta Administración ofrece. En el pasado, los Estados Unidos ofrecían ayuda a través de organizaciones locales —tales como la Iglesia, las universidades o los sindicatos— para la construcción de infraestructuras y las economías del Caribe, América Central y del Sur. Posteriormente se descubrió que esta ayuda estaba vinculada al aparato de inteligencia de estos países y condicionada a la estrategia militar. ¿Qué garantías tienen los países del Caribe de que la ayuda económica se utilizará ciertamente en su beneficio y no como una extensión adicional, de la política militar?

Y, finalmente, la Congressional Black Caucus Task Force on the Caribbean desea abordar el nefasto y peligroso componente militar de la política de la ICC. Esta Administración parece decidida a convertir al Caribe y a la América Central en otra zona de guerra. En el gran juego de la política mundial que aparentemente despliega, los estrategas parecen estar resueltos a contar con un peón en el Caribe cuando vayan a negociar con la Unión Soviética. El ex secretario de Estado, Cyrus Vance, estaba en lo cierto cuando expresó: “pensar que uno puede convertir esto en una confrontación Este-Oeste, desacreditarlos [a los soviéticos] y salir airoso, es engañarse a sí mismo”. Poco antes del anuncio de la ICC la Administración hizo propaganda en favor de la creación de una alianza de defensa militar, integrada por países de América Central —algunos de los cuales tenían una reputación dudosa en lo que respecta a los derechos humanos— bajo el nombre de American Democratic Community. Casi al mismo tiempo que pronunciaba el discurso, el Presidente dirigió, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la operación Safe Pass 1982. En estas maniobras militares, que se efectuaron en el Golfo de México, participaron treinta buques de guerra, ochenta aviones y cerca de diez mil hombres.

¿Qué podíamos, esperar de estas pequeñas naciones del Caribe una vez que se anunciaron maniobras como estas? Para ellos, estas maniobras combinadas recuerdan simplemente la anterior diplomacia de las cañoneras, el brazo de una gran potencia blandiendo un gran garrote para enseñarles a estos pueblos una lección si intentan abandonar sus filas.

Además, adicional mente a la llamada ayuda a los países del Caribe y de América Central —el grueso de la cual es una ayuda militar a las dictaduras de América Central—, los Estados Unidos venden aviones “F-16” a Venezuela, que ha reclamado las dos terceras partes del territorio de Guyana: venden jeeps y camiones a Guatemala; consideran posibles ventas de armas a este país, establecen bases en Colombia y Honduras; y posiblemente envíen armas a otras repúblicas de América Central.

Menos de dos semanas después del discurso del Presidente ante la Organización de Estados Americanos, The Washington Post publicó extensos artículos sobre operaciones encubiertas militares y paramilitares que se realizaban contra Nicaragua.

Hasta la fecha, la Administración no ha negado las actividades encubiertas o paramilitares contra gobiernos con los cuales discrepamos.

Los miembros del Congressional Black Caucus han tenido oportunidades de discutir esta política de desestabilización con varios líderes caribeños.

Su principal temor es que estas políticas destituyan las instituciones económicas, sociales y políticas de la región, que ya son bastantes débiles. Por ejemplo, a veces olvidamos el tipo de sociedades con las que lidiamos. La desestabilización de un país del tamaño de Granada significa que todo el aparato de los Estados Unidos se encadena para destruir y desestabilizar un país del tamaño de Akron, en Ohio, o de Fresno, en California.

Cuando los Estados Unidos, con su gran poderío y superioridad militar, se sienten amenazados por un país de esas dimensiones; cuando nuestra nación, con su historia, su prestigio, sus vastos recursos y su importancia global, se proyectan tan ensañadamente contra un país negro de ciento diez mil habitantes, entonces nuestro problema es serio. Ciertamente, nuestro prestigio y nuestra cordura se cuestionan debido a estas medidas extremas.

Esta Administración parece decidida a declarar la guerra a muchos de los gobiernos con los que discrepamos y a situarse junto a las dictaduras militares. Cada vez se ve más avergonzado ante los ojos del mundo al adornar esta actitud belicosa con conferencias de prensa grandilocuentes y alardosas que tienen el propósito expreso de lograr en nuestro país el apoyo del público y la simpatía hacia las acciones militares y paramilitares contra Nicaragua, Granada y Cuba.

De manera creciente los Estados Unidos se ven aislados de la opinión pública mayoritaria de América Latina y el Caribe, precisamente a causa de esta beligerancia. Y lo que es más importante: esta Administración se encuentra aislada de su propio pueblo. La abrumadora mayoría de las personas entrevistadas por la GBS y el New York Times se opuso al incremento de la involucración militar de los Estados Unidos en América Central y el Caribe, y el 80% de los negros se opuso a la política actual.. Debemos detener de inmediato esta demente inclinación hacia la guerra en la región, y reconocer que el diálogo con los regímenes con los que mantenemos discrepancias —los de Nicaragua, Granada y Cuba—, es un acto de poderío y no de debilidad. Sólo mediante la reducción de tensiones podemos abordar la tarea del desarrollo económico.

Resulta un imperativo que nosotros, como nación, aceptemos, el hecho de que los países del Caribe algunas veces han de tomar caminos hacia el desarrollo con los que no siempre estaremos de acuerdo. Tenemos que recordarnos constantemente que la pobreza y el subdesarrollo del Caribe no pueden eliminarse tratando de derrocar a gobiernos como el de Cuba, Nicaragua y Granada.

Además, deberíamos abrazar la iniciativa mexicana con un entusiasmo que, hasta la fecha, esta Administración no ha demostrado. El Congressional Black Caucus ve con beneplácito que la Administración haya considerado adecuado consultar seriamente con los mexicanos su iniciativa para resolver la crisis de América Central. Pero, ¿por qué costó tanto trabajo convencer a la Administración de esa necesidad tan evidente?

Debemos recordar que nuestra relación con México es algo más que una simple relación de país a país, que existe una simple historia, una rica relación y varios millones de ciudadanos con lazos culturales, lingüísticos e históricos con México. Debemos utilizar este valioso vínculo en lugar de indisponer a México con una actitud despreciativa hacia sus intentos por aliviar las tensiones.

Lamentablemente, un obstáculo importante de nuestra política exterior es el racismo. Nuestro trato hacia los refugiados haitianos es un buen ejemplo de ese tipo de racismo. Dentro de la ICC virtualmente se pasan por alto los enormes problemas económicos que dan origen a este flujo de refugiados y no se ofrecen soluciones globales para los problemas. Incluso el propio lenguaje de la ICC se refiere al problema de la “inmigración ilegal” como fundamento para ofrecerle a este país la mezquina suma de cinco millones de dólares. El “problema” se considera como uno de este país, y no un problema de los miles de refugiados haitianos desesperados y sin hogar.

En conclusión, el Congressional Black Caucus debe recordar a la Administración que el racismo ha sido un mal en nuestro país y que ha destruido muchas de nuestras mejores intenciones. Sería una tragedia que este mal se extendiera y se introdujera en nuestra política exterior, en la que las culturas negra y mestiza del Caribe son ignoradas o relegadas a un plano inferior, donde las tentativas de países como México de tomar la batuta para resolver conflictos se acogen con condescendencia, y donde las revoluciones autóctonas se le atribuyen a la Unión Soviética. Debemos comenzar por reconocer a estos países por su propio derecho, como entidades legítimas en el seno de las naciones del mundo.

Ya es hora de que este país evalúe sus errores pasados y rectifique el pasado. Hemos sido participantes activos en el subdesarrollo del Caribe. Por consiguiente, el problema no lo hemos dejado de la mano, sino que nos hemos situado, durante mucho tiempo, del lado equivocado de la historia.